

viles del Distrito federal, con violacion de las garantías que contiene el artículo 14 de la Constitucion de la República, en virtud de no haberse promulgado en el mencionado puerto, ni el decreto de fecha 27 de Mayo del año pasado, que ordenó la observancia del expresado Código, ni tampoco este mismo, y considerando:

Que conforme al artículo 14 de la Constitucion de la República, nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho.

Que por las pruebas rendidas por el quejoso, aparece plenamente justificada la falta de promulgacion en Tampico, del Código de procedimientos civiles del Distrito federal, y del decreto de 27 de Mayo del año próximo pasado que dispuso se observara en el Estado.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 14, 101 y 102 de la Constitucion federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito en 6 de Julio del presente año, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á D. Cándido Ramos, contra los procedimientos del Alcalde 1º de Tampico, en el interdicto de obra nueva que le tiene promovido D. Ramon Obregon, en cuanto en ellos se ha aplicado el Código de procedimientos civiles del Distrito federal y territorio de la Baja California.

Devuélvase estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron. —José María Iglesias. —Miguel Auza. —José M. Lozano. —José María Arteaga. —Ignacio Ramírez. —Manuel de Castañeda y Nájera. —Ignacio María Altamirano. —Simon Guzman. —M. Zavala. —José García Ramírez. —Enrique Landa, secretario.

TOMO VI.—PARTE II.

Es copia que certifico. México, 4 de Setiembre de 1874.—Lic. Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. Lic. Eduardo Pankhurst, en representacion de Don Oscar Lorentzen, D. Felipe, D. José P., D. Santiago Villanueva y Don Manuel Dargui, contra la Administracion principal de rentas de la Capital de ese Estado, que les exige el pago del uno por ciento sobre el numerario colocado para su exportacion.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Gefe de Hacienda, que por ministerio de la ley desempeña la promotoria fiscal, manifiesta: que el ocurso presentado por el C. Lic. Eduardo G. Pankhurst en representacion de varios comerciantes de esta Capital, pidiendo por lo pronto la suspension del cobro del uno por ciento que pretende la administracion de rentas del Estado, en virtud de la ley de la Legislatura, de 19 de Mayo del año próximo pasado, está fundado en el artículo 72 de la Constitucion general vigente, que prohíbe á los Estados gravar la exportacion de metales, y por cuyo fundamento, el Juzgado dispuso de conformidad con lo pedido del acto reclamado de suspension, dictando además los trámites que previene la ley de 20 de Enero de 1869.

Al evacuar la administracion de rentas el informe respectivo, expone: que no estando derogada la indicada ley del Estado, y habiendo dado las razones en otros juicios de igual naturaleza, sus antecesoros, se refiere á ellos. Desconociendo el que suscribe esas razones, pero teniendo presente los conside-

rando que han precedido á la declaracion de amparo en los otros juicios promovidos en anteriores conductas, y que en otros Estados, como Jalisco, han obtenido el amparo los que lo han solicitado, soy de opinion que el Juzgado de Distrito ampare y proteja á los comerciantes representados por el C. Lic. Eduardo Pankhurst.

Creo de mi deber exponer, que si no formé el pedido en el término señalado, ha sido por el recargo de las labores de mi oficina que en éste mes se aumentan considerablemente por el arreglo de la cuenta del año fiscal, y por la formacion de documentos importantes, que es preciso hacer con prolijo esmero y cuidado.

Por lo expuesto, al Juzgado pido: que la Justicia de la Union proteja y ampare á los representados por el C. Lic. Eduardo G. Pankhurst; que sáquen guias de la Gofatura de Hacienda, previo el pago del cinco por ciento derechos de exportacion, en la conducta que salió el 8 del actual para Tampico y Veracruz. Zacatecas, 16 de Julio de 1874.—*José María Saldierna.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Zacatecas, 27 de Julio de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por el Lic. Eduardo G. Pankhurst en representacion de Don Oscar Lorentzen, Don Felipe, Don José Pablo y Don Santiago Villanueva y Don Manuel Darqui, contra la Administracion principal de rentas de la Capital, que les exige el pago del uno por ciento sobre el numerario colocado para su exportacion en la conducta que con direccion á Tampico y Veracruz, debia salir el 8 del presente, y contra la disposicion del artículo 2º del decreto número 92 de la Legislatura del Estado fecha 19 de Marzo del año anterior, por no estar autorizado el Estado de Zacatecas para imponer contribuciones sobre importaciones y exportaciones, invadiendo las facultades consignadas al Congreso de la

Union en la fraccion 9ª del artículo 72 de la Constitucion general, y con infraccion de la fraccion 3ª del artículo 112 del mismo Código. Vista la suspension provisional; el informe de la administracion principal de rentas; el pedimento del C. Cefe de Hacienda que desempeña las funciones de Promotor fiscal, por ministerio de la ley, y la citacion para sentencia.

Considerando; 1º: que el referido impuesto de uno por ciento, llamado de extraccion, cuando recae sobre los caudales puestos en conducta con destino al extranjero, á cuyo efecto han pagado ya á la Hacienda federal el cinco por ciento de exportacion, y obtenido las correspondientes guias con escala 6 sin ella; se convierten necesariamente en un verdadero derecho de exportacion que el Estado cobra sin consentimiento del Congreso de la Union, como lo requiere la fraccion 1ª del artículo 112 de la Constitucion.

2º: Que ademas de esto, la moneda aunque bajo ciertos respectos es una mercancía igual á cualquiera otra y sujeta á las mismas leyes y principios que todas en su produccion y consumo, como lo acreditan las sanas teorías de la ciencia económica, bajo otras, conforme á las leyes fundamentales del país, se considera y debe considerarse como una mercancía especialísima, que por lo mismo debe sujetarse á leyes y condiciones tambien especiales.

3º: Que bajo éste respecto, la moneda, en el régimen de gobierno que tiene adoptado la República, ha estado siempre sujeta en su produccion, circulacion y extraccion ó exportacion, á las leyes inherentes, y es conveniente que así se verifique en interés de toda la República, que se perjudicaría notablemente si á cada uno de los Estados de la federacion fuera lícito establecer reglas sobre su produccion y exportacion.

4º: Que la necesidad de conservar el valor de la moneda, como una mercancía universal, indispensable para realizar toda clase de transacciones mercantiles entre los di-

ferentes pueblos de la tierra, al abrigo de alteraciones caprichosas, y bajo la influencia de leyes uniformes, ha hecho que esa materia se someta á convenciones especiales entre las naciones, poniéndola bajo la protección del derecho internacional.

5º: Que el Gobierno de la República á quien competiría celebrar una convencion de esta especie, en el caso que así pareciera útil á los intereses mercantiles de la misma República, no podría hacerlo si cada Estado de la federacion tuviera libertad de gravar la circulacion de la moneda, cualquiera que fuera la forma y el nombre de ese gravámen, que en último análisis vendría á producir alteraciones en el valor de la misma moneda.

6º: Que por estas razones, la Legislatura del Estado de Zacatecas es incompetente para gravar los caudales extraídos fuera de su territorio, con un derecho, cualquiera que sea su denominacion y carácter.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los artículos 72 fraccion 9ª, y 112 fraccion 1ª; de conformidad con lo pedido por el C. Jefe de Hacienda y lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1869, sentenciando definitivamente este juicio, el Juzgado declara:

Primero: que la Justicia de la Union ampara y protege á Don Oscar Lorentzen, Don Felipe, Don José Pablo y Don Santiago Villanueva y á Don Manuel Darqui por Genaro de la Fuente sucesores, contra el acto de la Administracion principal de rentas de esta Capital, que les exigía el pago del uno por ciento sobre los fondos que debían exportar en la conducta del 8 del presente, en cumplimiento del decreto de la Legislatura del Estado fecha 19 de Marzo del año anterior, por invadirse en dicha ley facultades del Congreso de la Union.

Segundo: Hágase saber; publíquese esta sentencia en el Diario Oficial del Estado; sáquense las copias respectivas para el Semanario Judicial, y remítanse los autos en revision á la Suprema Corte de Justicia.

El C. Juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó. Doy fé.—*Manuel G. Solana*—*Luis G. Chavez*.

Es copia que certifico. Zacatecas, Julio 31 de 1873.—*Luis G. Chavez*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 14 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. Lic. Eduardo Pankhurst, en representacion de Don Oscar Lorentzen, D. Felipe, Don José P. y D. Santiago Villanueva y Don Manuel Darqui, contra la Administracion principal de rentas de la Capital de ese Estado, que les exige el pago del uno por ciento sobre el numerario colocado para su exportacion en la conducta que con direccion á Tampico y Veracruz debía salir el 8 del presente, contra la disposicion del artículo 2º del decreto número 82 de la Legislatura del Estado. Visto el informe de la autoridad responsable; el pedimento del Jefe de Hacienda que desempeña las funciones de Promotor fiscal por ministerio de la ley, y la sentencia del Juez de Distrito.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitucion federal, se declara: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito que concedió el amparo á los quejosos.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias*.—*Aliguel Auza*.—*Juan J. de la Garza*.—*José María Lozano*.—*José María Arteaga*.—*Ignacio Ramirez*.—*M. de Cas-*

tañeda y Nájera.—Ignacio María Altamirano.—Simón Guzman.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Enrique Landa, secretario.

Es copia que certifico. México, 4 de Setiembre de 1874.—*Lio. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Durango por el C. Jesus Rios y Valle, en representacion de Manuel Alcalde, contra el auto de prision que en su contra dictó el C. Juez 1º del ramo criminal de la Capital de ese Estado.

—*Juan Nájera*—Una rúbrica.
Es copia que certifico. Durango, 8 de Agosto de 1874.—*Juan Nájera*.

Auto del C. Juez de Distrito.

Agosto 3 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido por Jesus Rios y Valle, en representacion de Manuel Alcalde, contra el auto que en su contra dictó el C. Juez 1º del ramo criminal de esta Ciudad. Teniendo cuenta el informe de la autoridad que lo pidió por el ministerio fiscal, me parece ver convino.

Considerando: Que de las constancias de autos aparece que la causa ó motivo en virtud del cual el C. Juez 1º del ramo criminal dictó el auto de prision de Manuel Alcalde, fué el haberse encontrado en su poder de este último, dos yuntas de bueyes que se decian robadas.

Y autos consta tambien, que inmediatamente que fué interrogado Alcalde sobre el particular, presentó á la persona que robó, que no es otra que Crisanto monterero del rancho de Calleros. Y que es verdad que conducido San-

bada, y menos cuando este mismo individuo es persona que no haya dado motivo para dudar de su honrra de bien, que es lo que aquí pasa con relacion al monterero de Calleros, Crisanto Sanchez.

Por lo expuesto, opina el fiscal, que no hay mérito para creer de sospechoso de robo á Don Manuel Alcalde; y sentado este principio, aparece, que al dictarse auto de prision en su contra, se violan en su persona las garantías que le otorga el artículo 16 de la Constitucion política de la República. Concluye por lo mismo el autor de este dictámen pidiendo á la Justicia de la Union su proteccion y amparo á favor de D. Manuel Alcalde, contra el auto del Juez 1º del ramo criminal de esta Ciudad, que mandó

capital de ese Estado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Gefe superior de Hacienda encargado de llevar la voz fiscal, dice: que por las pruebas testimoniales que ha presentado el quejoso D. Manuel Alcalde y obran á fojas 9, 10 y 11, está probado plenamente que las dos yuntas de bueyes que aparecieron en su poder, le fueron arrendadas por el monterero de Calleros, Crisanto Sanchez, á quien ha presentado ante el Juzgado 1º del ramo criminal, ofreciendo tambien presentar las pruebas sobre el hecho de que se trata, y sobre la buena reputacion que goza el mismo Alcalde en esta Ciudad.

Si bien es cierto que se hace acreedor al auto de prision todo aquel ciudadano en cuyo poder aparece una cosa robada, esto debe entenderse cuando se trata de un individuo que no tiene en su abono el notorio goce de una buena reputacion, ó bien, cuando la fama pública lo acusa como sospechoso. Igual cosa sucede cuando el tenedor de la cosa robada no presenta ante el Juez el individuo de quien la hubo; pero no está en iguales circunstancias el honrado ciudadano que presenta al que le entregó la cosa ro-

de 1874
Es co
Agosto

Sent

Dura
presente
el C. J.
tacion d
de prisi
1º del r
niendo
respecti
y cuanto

Cons
autos a
que se f
mo crim
en conti
trado en
de bueye

Que d
diatamer
bre el p
se los al
Sanchez,
Que an